

LA IDENTIDAD COLECTIVA COMO ARMA POLÍTICA DE RESISTENCIA. EL CASO DE LA PRESA PICACHOS

*Sibely Cañedo Cázarez
Juan Manuel Mendoza Guerrero*

1. Antecedentes

El momento de la reconstrucción social y urbana ha llegado para los seis pueblos desplazados por la construcción de la presa Picachos: San Marcos, Puerta de San Marcos, Los Copales y El Placer, en el municipio de Mazatlán, así como Las Iguanas y Casas Viejas en el municipio de Concordia, hacia el sur del estado de Sinaloa.

La presa Picachos, proyecto hidráulico de gran envergadura y parte del plan Baluarte-Presidio en la región, ha sido estandarte de los gobiernos federal y estatal que —de acuerdo al discurso oficial— promete ampliar la cobertura de riego para tierras agrícolas y dotar de agua a Mazatlán durante las próximas cinco décadas. La factura en términos sociales ha sido alta. El embalse de la presa arrastró al fondo del agua al menos siglo y medio de historia, tradiciones y culturas locales.

Desde su proyección en la década de 1980, y de manera manifiesta durante el banderazo de la obra, el 7 de febrero de 2006, cuando no hubo una sola mención a las comunidades desplazadas, fue notorio que los impactos culturales, ecológicos y sociales no fueron una prioridad para las autoridades a cargo, lo que desencadenó un conflicto cuya solución aún parece lejana. En el 2007 comenzaron las presiones oficiales por acelerar el desalojo de los pobladores bajo un ambiente de tensión e inconformidad por parte de los comuneros, respecto a las indemnizaciones y al reasentamiento, a cargo del Gobierno del Estado, principal ejecutor del proyecto. Un largo historial de marchas, plantones y manifestaciones de protesta ha marcado la problemática y al mismo tiempo la convirtieron en un problema de la opinión pública al llevar a las ciudades de Mazatlán y Culiacán sus demandas.

La llegada de las lluvias en el 2009 marcó el inicio de la fase más intensa de la movilización hacia los llamados “nuevos pueblos”, asentamientos construidos por el Gobierno del Estado en terrenos aledaños para reinstalar a los pobladores afectados. El desplazamiento llevó consigo

no únicamente la reubicación geográfica de las comunidades, sino además la necesidad de conservar su herencia cultural. En este contexto, intentan edificar no sólo los nuevos espacios para la subsistencia, sino la preservación de su identidad, un proceso acumulativo de las vivencias de sus antepasados durante décadas y generaciones que arroparon el sentido de pertenencia a una comunidad y a un territorio delimitado. A este conglomerado de significados y símbolos, ya de por sí trascendentes, es necesario sumar la experiencia de cada individuo a lo largo de su vida.

En la búsqueda de preservar su identidad cultural, su manera de ser y de ver las cosas, los desplazados cargaron consigo tejas, cancelas, puertas y todo lo que signifique proteger la memoria y los enlace afectivamente a sus recuerdos, acciones que perpetraron en los duros momentos en que dismantelaban las casas que habitaron durante años. En la coyuntura de la reubicación, la adscripción identitaria territorial cobra mayor vigor, y se puede observar el cambio de percepción de una identidad san marqueña a una nueva identidad, “Los Picachos”, surgida de la lucha social por mejores condiciones de vida e indemnizaciones justas.

A más de cinco años del arranque de la obra, los nuevos pueblos construidos aún no han sido terminados, padecen el desabasto de agua potable, deficiencias en la energía eléctrica y el proceso de indemnizaciones continúa inconcluso. Otras de las denuncias son que las calles y los caminos se encuentran en pésimo estado y algunas casas se ubican junto a cerros en peligro de deslave. Con las primeras lluvias en los nuevos poblados, salieron a relucir fallas estructurales en las viviendas, por lo que los comuneros aseguran que el Gobierno del Estado no cumplió el compromiso de facilitar una vida digna a los pobladores desplazados.

En este caso resulta significativa la particularidad de la “muerte” de su territorio original. A diferencia de otros desplazados, los afectados por la presa ven su lugar de origen “ahogarse” bajo el agua y, desde luego, esto conlleva la fatal certeza de que jamás regresarán a él. Sólo quedarán para la remembranza algunos objetos físicos como fotografías, videos, artesanías, artefactos agrícolas e infinidad de artículos personales, pero sobre todo su propia evocación, la reconstrucción mental que cada uno de los habitantes, y quizá también en forma colectiva, se formule del Viejo San Marcos, el cual posiblemente se convierta en paisaje idílico o mitológico: una postal psíquica, construida desde la memoria y hacia la nostalgia.

El conflicto ha sido el modelador de una nueva identidad y una percepción más consciente y manifiesta sobre el apego al territorio y todo lo que éste significa. El propósito de la presente exposición es mostrar las estrategias de sobrevivencia y de negociación que los grupos sociales considerados subalternos desarrollan para enfrentar las decisiones gubernamentales, impuestas de forma vertical y arbitraria, ya sea con el fin de modificar las políticas públicas o las condiciones en que estas se llevan a cabo.

Bajo la inspiración de los estudios culturales de Stuart Hall, que percibió a la cultura más que por su valor descriptivo o etnográfico, sino por su importancia para la investigación social y política al ser el terreno empírico donde se libran las pequeñas batallas diarias de los grupos subordinados y las clases dominantes. Hall, a su vez influido por la concepción gramsciana, inauguró una nueva forma de abordar la cultura como categoría de análisis pero también como práctica política. La hegemonía, según Gramsci, funciona como aparato amortiguador de la resistencia a través de la negociación, incorporación y concesión, más allá de la simple represión gubernamental a través del aparato de la fuerza de las armas. Para lograr la hegemonía, el Estado necesita primero conseguir el consenso y la legitimidad, y esto se consigue en el ámbito de la cultura, donde se legitiman los ejercicios del poder o crecen fuerzas antagónicas de oposición.

2. Una arraigada tradición de exclusión social

Pero lo que pasó con la presa Picachos forma parte de una larga tradición mundial y adoptada en la política de desarrollo nacional para la construcción de grandes represas, concebidas como la panacea para lograr el despegue económico de cualquier país. En México, por varias décadas las presas hidroeléctricas fueron pieza clave de una estrategia nacional para lograr la autonomía en materia energética, en un contexto histórico donde se vivía un clima profundamente nacionalista. En el gobierno de Lázaro Cárdenas (1934-1940) se creó el Departamento de Recursos Hidráulicos —más tarde la Secretaría de Recursos Hidráulicos— y se expropió parte de las instalaciones eléctricas extranjeras formando lo que hoy es la Comisión Federal de Electricidad (CFE). En ese sexenio gubernamental, en 1937, se construyó en el norte del estado de Durango la primera presa de control de irrigación.

La década de 1940 marcó la primera fase intensa de inversión material y humana en un sistema nacional de irrigación y presas hidroeléctricas, cuya instalación comenzó a expandirse a lo largo y ancho del territorio nacional. El gobierno federal aplicaba el derecho de expropiación con la justificación del interés público, desplazando principalmente a comunidades indígenas, con una concepción capitalista del desarrollo en la que los “sacrificios” de ciertos grupos de la sociedad son un mal necesario. La validez del proyecto hidroenergético se aceptó sin discusión durante varios sexenios más. Hasta 1980, México fue el país con la mayor población desplazada por irrigación y presas hidroeléctricas. A partir de 1982, con el estallido de la bancarrota del Estado mexicano durante el sexenio de José López Portillo, el partido dominante, el PRI, comenzó a perder legitimidad y se empezó a diversificar el ambiente político. Las acciones gubernamentales comenzaron a enfrentar el rechazo social y fue el caso de la construcción de presas. A consecuencia de esto, la CFE canceló en 1983 el proyecto de la presa de Itzantun, Chiapas, después de una cuantiosa inversión y de una movilización social que no se conocía hasta el momento. Tres años más tarde, por primera vez una comunidad de disidentes se rehusó a obedecer el plan de reasentamiento del gobierno en el proyecto de la presa Caracol y por primera vez se interpuso una demanda contra la CFE y obligó a esta a negociar con los inconformes una nueva indemnización, ya que la original se había hecho con los valores de 1981 antes de la espiral inflacionaria que comenzó en el año siguiente. Recientemente, otra presa cancelada fue la de San Juan Tetelcingo, Guerrero, en 1992.

Pero uno de los hechos que más impactaron en la conciencia de las comunidades rurales fue el desalojo de cerca de 25 mil chinantecas en el estado de Veracruz, con la presa Cerro de Oro, que se dio en varias etapas entre 1975 y 1988. Se considera uno de los reasentamientos más trágicos del país y un etnocidio inducido. Fue el primer caso ampliamente documentado y ventilado en la prensa de forma contundente. Es una forma que por mucho tiempo socialmente tolerada, donde la noción de desarrollo industrial arrasaba conceptualmente también con el desarrollo del campo, una ideologización proveniente de las teorías de la modernización, donde lo más natural y deseable era que la urbanización y las fábricas absorbieran a las zonas rurales e indígenas, por considerarse aun como parte del pasado, un lastre para el progreso. De ahí deriva, en parte, la escasa relevancia otorgada por parte de los gobernantes a las poblaciones desplazadas, excluidas muchas veces de los planes de reasentamiento que afectarán directamente su futuro.

El largo historial de ocultamiento de algunos pueblos y culturas para favorecer la supuesta modernización del país, ha resultado evidente también en el caso de la presa Picachos. Aparece la política del olvido: la negación de la historia como una forma de combatir la memoria colectiva. Llama la atención que los discursos oficiales sobre el proyecto de la presa jamás mencionaron a los comuneros que serían desalojados. Las ponencias enfatizaban las bondades de la presa, los beneficios en irrigación, almacenamiento y dotación de agua, pero los pueblos que quedarían bajo el agua, también quedaron bajo el agua de un discurso totalmente unilateral. De acuerdo a la Comisión Mundial de Represas, organismo de la Organización de las Naciones Unidas para la evaluación de los grandes proyectos hidráulicos a nivel global, esta es una tendencia generalizada entre los desarrolladores de este tipo de proyectos. Como si la sola mención fuera una especie de invocación que haría aparecer al monstruo de la participación social. Aun sabiendo cuáles serían las zonas y poblados devastados, no se levantó ninguna investigación de tipo cultural que registrara las características particulares de los lugares condenados a desaparecer. Durante las detonaciones en la sierra del río Presidio, trabajadores de la constructora Andrade Gutiérrez encontraron petroglifos, los cuales fueron reportados al Instituto Nacional de Antropología e Historia, pero sólo por el interés de algunos pobladores y de los propios obreros de la construcción autores del hallazgo. El Archivo municipal no cuenta con ningún trabajo académico u oficial que sirva de testimonio para las futuras generaciones sobre la vida de los poblados de la sierra y sus usos y costumbres, sólo textos periodísticos o escritos aislados. La tarea del registro de las formas culturales de los pueblos es más bien una tarea marginal, realizada por unos pocos ciudadanos sin muchos recursos y sin apoyo del gobierno. Adrián García Cortés, cronista secretario del Instituto de Investigaciones Históricas y Archivistas “La Crónica de Sinaloa”, señala que la desmemoria histórica se ha convertido en un problema grave en el estado; “porque distorsiona la identidad o la anula, y al paso del tiempo genera ausencia total de participación social”.¹

Otra forma de exclusión o de aniquilamiento de la memoria, es la destrucción de las formas anteriores de vida, como la arquitectura, el estilo de urbanización, los espacios físicos que sirven de base y facilitadores para una organización cultural determinada. Este es el sentido de la topofilia, pues la interacción social y toda la socialización simbólica y significativa se desarrolla en un espacio físico concreto, el cual a su vez alimenta el sentimiento de identidad con una comunidad. En la transición del viejo al Nuevo San Marcos, se presenta un cambio

¹ Valenzuela Ortiz, Judith *et al* (2009). *Picachos. Los caminos del desarraigo y la resistencia*. Universidad Autónoma de Sinaloa. Mazatlán, Sinaloa. Pp. 131

drástico de un ambiente campirano a un poblado semiurbano con viviendas tipo Infonavit. Los investigadores René Armando Llanes Gutiérrez y Servando Rojo Quintero destacan los valores de la arquitectura vernácula sinaloense encontrada en los ahora pueblos extintos bajo el embalse de la presa: "...donde se integran como un todo los valores culturales de los usuarios, el objeto urbano-arquitectónico y el medio físico circundante (entorno)".²

Los viejos pueblos eran localidades de gran antigüedad y tradición (al menos de 150 años), algunas mencionadas en 1877 por Don Eustaquio Buelna en su *Compendio histórico, geográfico y estadístico*, o como la Puerta de San Marcos, que vio el paso del controvertido héroe Heraclio Bernal y donde dejó su Plan de Conitaca en tiempos revolucionarios. En una visita anterior al hundimiento, Llanes y Rojo describen así los antiguos poblados y su entorno sociourbano:

...La arquitectura y los espacios urbanos son producto de una respuesta a las condiciones climatológicas, culturales y de los recursos disponibles en el entorno. Por ejemplo, sus anchos muros son de adobe, los techos de vara blanca, lodo y teja; si los materiales usados ayudan a mitigar las altas temperaturas, la disposición de sus espacios (con una superficie construida de doscientos metros cuadrados en promedio) también responden a esta necesidad. Sus amplios portales permiten la libre circulación del aire, pero también son el espacio por excelencia donde se desarrolla la convivencia social: el externo es el de las "buenas tardes o días", el del saludo cotidiano con el transeúnte, el amigo o el vecino; el interno, el de la convivencia familiar. El lote es una extensión de la vivienda bajo la sombra de sus árboles, los moradores lo mismo descansan de la inclemencia de los rayos del sol, como también alberga los lavaderos y otras actividades.³

Si las construcciones particulares cumplían con ciertas funciones sociales y colectivas de convivencia, lo mismo era en el resto de la ciudad. Los pueblos desplazados contaban con la infraestructura urbana para actos colectivos, como las casas comunales, iglesia, plaza de armas con su típico kiosco. Además la vegetación y los jardines eran algo que le proporcionaba una identidad campirana a los pueblos y algo que los pobladores disfrutaban de forma rutinaria.

En contraparte, en los llamados nuevos pueblos las casas que intentan reemplazar a las antiguas distan mucho de las casas a las que los pobladores desplazados estaban acostumbrados. Las superficies construidas es mucho menor a la que contaban, en promedio

² *Ibíd.*

³ *Ibíd.*

las antiguas casas. Las nuevas viviendas cuentan sólo con una recámara para toda la familia, un solo cuarto para sala-comedor y una pequeña cocina. Sin mencionar que los materiales no corresponden a las condiciones climatológicas de la región. Por ejemplo, el techo de asbesto es un peligro para los habitantes ya que es un material prohibido en varios países por considerarse cancerígeno. De acuerdo al diagnóstico de arquitectos de la Universidad Autónoma de Sinaloa, los nuevos asentamientos se localizan en terrenos inestables, y al estar ubicados en colinas y faldas de cerros, se corre el riesgo de deslaves, erosiones y derrumbes, los cuales se presentaron en los primeros meses después de la reubicación. En la visita más reciente realizada al Nuevo San Marcos se detectaron personas que aún no contaban con una nueva vivienda asignada, y el número de personas en esta situación era aproximadamente sesenta, según testimonios levantados en el lugar, incluso en algunos puntos de los viejos pueblos que no se terminaban de inundar permanecían resistiendo unas catorce familias, que antes de las lluvias del 2011 se negaban a abandonar su lugar de origen. Se pudo observar que después de la relocalización, los pobladores del Nuevo San Marcos han ido modificando las casas que les fueron entregadas por el gobierno, tratando de adaptarlas a su antiguo estilo de vida, con jardines coloridos y de gran variedad de vegetación, así como con el tradicional porche y el patio para labores domésticas, aunque estos casos son una minoría ya que requieren una inversión económica fuerte. En cuanto a las vialidades, pasaron de contar con amplias avenidas de terracería o empedrados a un entorno semiurbano, con las avenidas principales pavimentadas y el resto aun con terracería, pero con terrenos escarpados. Además, de que la falta de árboles provoca el aumento del calor en época de verano, con una sensación térmica de hasta 40 grados centígrados, aunque cabe aclarar que las altas temperaturas son naturales en la zona. Varios vecinos reportaron malestares a causa de las nuevas condiciones climáticas, ya que si bien en los viejos pueblos también se presentaban las altas temperaturas, ahora carecían de la sombra de los árboles y estaban lejos de algún arroyo o cuerpo de agua. Después de casi dos años de reubicación, los servicios básicos como agua potable y luz no terminaban de regularizarse. Algunos vecinos entrevistados manifestaron que el cambio en la disposición de los espacios había afectado su vida cotidiana y laboral, ya que anteriormente acostumbraban ir caminando hacia las milpas o a los terrenos donde engordaban el ganado, lo que ahora es difícil porque quedaron más lejos y el pago del transporte encarece los costos de producción. Sobre las actividades económicas, aún prevalece la incertidumbre ya que muchos pobladores no cuentan con una fuente de ingresos segura luego de vender sus tierras agrícolas para la obra de la presa. Además se pudo advertir el peligro de la desarticulación comunitaria,

porque como comentaron los vecinos entrevistados, muchos pobladores sólo pasan los fines de semana en el Nuevo San Marcos y el resto de la semana en el puerto de Mazatlán, sin contar otro porcentaje que ha emigrado hacia otras ciudades del país o de Estados Unidos. Este fenómeno debido a la falta de oportunidades para los pobladores y sus hijos. Otro fenómeno que está abonando a la desintegración poblacional es la violencia que se vive en la región, ya que de acuerdo a testimonios de algunos pobladores grupos armados amenazan a la gente para que abandonen el territorio, sin embargo, muchos han resistido a pesar de todo, de la problemática de la reubicación con el gobierno estatal, y después del peligro de los hechos violentos a manos de grupos de la delincuencia organizada. Hay evidencias para asegurar que la política del olvido provoca el desarraigo en los pueblos, al desintegrar los lazos sociales y territoriales que unen a las comunidades. En resumen un contraste absoluto con la tranquilidad de que gozaban en sus vidas en el campo. La realidad del reasentamiento más que a un desalojo se convirtió en un proceso de expulsión. No obstante, la política del olvido no se presentó sin resistencia en el caso de los hombres y mujeres afectados por la presa Picachos.

3. Las estrategias de la resistencia desde la identidad territorial

Las irregularidades que se percibieron desde 2005, cuando iniciaron las negociaciones para la expropiación de los terrenos de los seis poblados para dar lugar a la obra de infraestructura, desataron una serie de suspicacias por parte de los comuneros, quienes al poco tiempo se organizaron en un movimiento colectivo cuyo elemento de cohesión fue el amor a la tierra y las exigencias de mejores condiciones del desplazamiento. El elemento territorial fue un elemento central en las demandas, ya que el gobierno, de acuerdo al avalúo del Instituto Nacional para la Administración de bienes nacionales asignó un valor de 45 mil pesos por hectárea, equivalente al de una simple transacción comercial, cuando en realidad se trataba de un desalojo involuntario para beneficio del bien público. El representante legal de los comuneros, Ernesto Pérez Virgen, explotó ampliamente los elementos identitarios del espacio físico, ya que los valuadores del Estado no tomaban en cuenta las particularidades como altura de los techos, tipo de materiales, estilos de los ventanales, portones, tampoco los árboles y los espacios de uso común y de valor intangible en muchos de los casos, como el paisaje y la naturaleza por sí mismos. Todo esto hacía una enorme diferencia entre lo que pedían los comuneros y lo que ofrecía el Gobierno federal.

Desde el inicio de la movilización de los desplazados, la bandera de la identidad territorial fue una de sus armas más poderosas, sobre todo al involucrar a la opinión pública a través de un hábil manejo de medios. Los periodistas jugaron un papel de testigos activos en el movimiento, ya que a través de sus cámaras y sus escritos la sociedad se involucró en el conflicto y subió a la mesa del debate público la disyuntiva pueblos o agua: desarrollo o preservación.

En la historia reciente abundan ejemplos de cómo la cultura y las identidades locales son el fundamento de los movimientos sociales reactivos contra la potencia globalizante del sistema económico y en ocasiones contra la lógica de absorción del capitalismo. Sobre este punto, destaca Manuel Castells:

Junto con la Revolución tecnológica, la transformación del capitalismo y la desaparición del estatismo, en el último cuarto de siglo hemos experimentado una marejada de vigorosas expresiones de identidad colectiva que desafían la globalización y el cosmopolitismo en nombre de la singularidad cultural y del control de la gente sobre sus vidas y entornos. (Castells, 1999: 23)

Esta hipótesis enfatiza que la construcción de las identidades siempre se presenta enmarcada en un contexto determinado de relaciones de poder, de lo que se pueden desprender tres formas y orígenes de la construcción de la identidad: identidad legitimadora, identidad de resistencia e identidad de proyecto. La primera es introducida por las instituciones dominantes, la segunda es promovida por aquellos actores que se encuentran en posiciones devaluadas o estigmatizadas; y la tercera, se presenta cuando los actores sociales, basándose en los materiales culturales de los que disponen, construyen una nueva identidad que redefine su posición en la sociedad. (*Ibid.*)

No se descarta que como parte de la movilidad social, la identidad de resistencia pueda desarrollarse hasta invadir los linderos de la identidad proyecto, al plantear una nueva propuesta de identidad, o incluso puede llegar a convertirse en identidad legitimadora si la lucha por la resistencia resulta triunfante. Los pobladores desplazados desarrollaron una identidad de resistencia, “Los Picachos”, cuyos portadores buscaron legitimarse entre otros sectores de la población y en todo momento hicieron de la falta de territorio su nueva marca identitaria.

La identidad gozó de pronto de una conceptualización plausible en las representaciones sociales populares en la región, al entrar al debate público incluso sin ser una idea mencionada de forma expresa. Nadie de los protestantes mencionó jamás abiertamente estar defendiendo su identidad. Sin embargo, quedaba en el discurso latente el derecho inherente y sin lugar a discusiones, como una condición natural de cualquier ser humano, de contar con una identidad tanto individual como colectiva, aunque esta sea relacionada a un territorio muy específico.

La identidad es un concepto estratégico en Ciencias Sociales, del que paradójicamente no se empezó a hablar sino hasta mediados del decenio de 1980. Su importancia radica en que sin ella no sería posible la interacción social, ya que esta se basa en la percepción que tienen los actores sociales de sí mismos y de los otros, que orienta el sentido de su acción. Además, la construcción de la identidad —tanto individual como colectiva— se encuentra indisolublemente ligada a la cultura, porque precisamente las identidades sólo pueden formarse a través de un conjunto de recursos culturales y sociales que el individuo y la colectividad encuentran a su disposición. La identidad es entonces un concepto inadvertido pero siempre presente, como sucedió en el conflicto de los pobladores desplazados por la presa Picachos, quienes utilizaron su pérdida territorial y, potencialmente, también de identidad, como un argumento casi incontestable por el cual tanto los ciudadanos ajenos al movimiento como la parte oficial les cedían la razón y como en el caso de los funcionarios aceptaban dialogar y negociar con ellos, y mediante lo cual se logró modificar en parte la manera en que iban a ser indemnizados por la desterritorialización. Quedaba claro a nivel que no se trataba de una simple transferencia comercial de terreno, sino que había elementos afectivos, culturales y sociales que estaban en juego y no podían ser soslayados tan fácilmente, más allá de los intereses puramente económicos aunque, por supuesto, estos también jugaron un papel clave.

En el conflicto de los “Picachos”, el recurso de la identidad territorial y su pérdida, se jugó en dos bandas: una ante el Gobierno y otra ante la sociedad en general, a través de la prensa escrita y de forma más contundente de los diarios locales, quienes dieron un detallado seguimiento al movimiento de protesta y a las exigencias de los desplazados, cosa que no ocurrió en los medios televisivos nacionales, quienes dieron atención esporádica a las acciones de protesta. A la cobertura se sumaron la televisora Grupo Pacífico a través del Canal 7 y la mayoría de los noticieros radiofónicos de Mazatlán, además diarios impresos de circulación nacional, destacando la información de La Jornada. El sitio de Internet

www.picachospueblos.blogspot.com, sirvió de puente ante medios informativos y ciudadanos interesados al presentar contenidos multimedia con los momentos más significativos de la movilización de los pueblos desplazados. El uso de la Red contribuyó a acrecentar el interés de investigadores y comunicadores. Cabe destacar el cortometraje *Venecia Sinaloa*, realizado por alumna del Centro Universitario de Estudios Universitarios (CUEC), Betzabé García Galindo, oriunda de Mazatlán, quien detalló que se trata de una historia de ficción con raíz documental. El estreno se realizó en la Ciudad de México el pasado mes de mayo y aborda la forma de vida de los pobladores de San Marcos. El trabajo fílmico será difundido en festivales, escuelas y otras poblaciones que atravesasen por las mismas circunstancias. Trabajos como este, así como otras investigaciones académicas y producciones editoriales contribuirán a preservar y activar la memoria colectiva y la reflexión social sobre el caso, considerando asimismo la proyección de estos testimonios como un logro de la política comunitaria de resistencia.

Los representantes de los medios de comunicación eran parte infaltable en cualquier acción de protesta. Sin ellos no se daba un paso de ninguna marcha. Los dirigentes advirtieron que la mano de Gobierno sería menos dura para evitar el repudio social, en caso de que se hicieran públicas las imágenes de una represión violenta. Además también utilizaban a los medios de comunicación para solicitar el respaldo de la ciudadanía y la comprensión por las molestias ocasionadas durante las tomas de las calles o plantones en oficinas de gobierno, entre otros actos. Parte de la estrategia era mantener un contacto directo y constante con los periodistas, informándoles de cada nueva decisión en el colectivo de la Picachos y atendiendo todas las inquietudes de los reporteros con gran diligencia. En todas las manifestaciones los viáticos se contaba con viáticos para los periodistas a quienes se les brindaba, al igual que a los propios manifestantes, agua y alimentos para que soportaran las intensas jornadas de protestas, que en algunas ocasiones eran de varios días.

“Se les hace un atento llamado a la gente de que nos apoye, hemos tenido pérdida de vidas humanas, hemos perdido muchas cosas, nuestro hábito de vivir, estamos sacrificando mucho, y yo creo que Gobierno no ha tenido tacto para tratar la situación de la Picachos y nos ha marginado bastante”, expresó en entrevista María del Rosario Alapizco Páez, líder del movimiento junto con Octavio Atilano Román, quienes ocuparon tal posición después del retiro forzado de Ernesto Pérez Virgen, el primer representante legal de los comuneros.

Es importante mencionar que los liderazgos constituyen los ejes principales a través de los cuales se dirime el conflicto. Según Max Weber, quien encontró relaciones de poder en todas las interacciones sociales, los tres tipos principales de dominación son: burocrático-legal, carismático y por tradición.

En la lucha de los comuneros, el poder burocrático (oficial) es representado por los gobernantes, tanto el mandatario estatal como el presidente municipal y los comisarios, además de otros funcionarios. No obstante, los líderes carismáticos ejercen un mayor peso sobre los comuneros ante el descrédito en que han caído los políticos, a quienes los inconformes se refieren como “rateros” o “abusivos” en el mejor de los casos. Estos líderes carismáticos son Atilano Román y Rosario Alapizco, portavoces de los pueblos desplazados y los principales interlocutores en los “jaloneos” con “Gobierno”, como ellos personalizan al poder público o como “Gobierno bandido”, la leyenda de cientos de pancartas en los múltiples actos de inconformidad.

En el liderazgo carismático, ha sobresalido el empoderamiento de las mujeres a lo largo de la resistencia. Al principio como una estrategia, ancianas, mujeres adultas y jóvenes con sus niños en brazos fueron enviadas al frente con la idea de complicar a los policías el uso de la fuerza. Después, las manifestantes mostraron su gusto por el empoderamiento, buscando imprimir un toque particular en cada protesta con nuevas frases y con el uso de símbolos, como el colocar flores en los escudos de los granaderos, enarbolar machetes en la toma de calles o el llevar los féretros de sus muertos errantes por las calles de la avenida del Mar, la vía más turística de la ciudad de Mazatlán. Una imagen ilustrativa se captó el 13 de julio de 2009, cuando las comuneras se careaban con los agentes antimotines, cuando estos desalojaban por la fuerza a los desplazados quienes mantenían tomada la construcción de la presa Picachos. Uno de los momentos más álgidos del movimiento, al igual que otro episodio donde los desplazados cargaban con sus muertos, exhumados de sus camposantos originales, ya que aún no se asignaba un lugar en las nuevas comunidades para los panteones. Fue también en el verano de 2009 cuando los periódicos locales dieron cuenta del drama de ver “deambular” a los difuntos desató una oleada de críticas contra el gobierno estatal, que abonó a la crisis de legitimidad de la gestión del entonces gobernador Jesús Aguilar Padilla (2004-2010), a quien se le calificó de insensible y negligente, al igual que a su equipo de trabajo. “Cómo es posible que se juegue con los sentimientos de la gente, con una ancestral tradición de enterrar a los muertos, de tener su panteón, un lugar donde rezarles...”, escribió Jesús Antonio Ríos Rojo, colaborador del semanario local Río Doce. Lo anterior se sumó a las acusaciones de corrupción contra

funcionarios estatales en torno a las indemnizaciones de la presa Picachos y a la ineficiencia para la planeación del reasentamiento, lo cual debilitó ante la opinión pública la imagen del gobierno estatal. La crónica de Feliciano Castro Meléndrez, exdiputado local de la 58 Legislatura, publicada en el libro *Picachos. Los caminos del desarraigo y la resistencia*, relata sobre la tarde del 19 de julio cuando la procesión de los “muertos” atravesó la avenida Camarón Sábalo, en la Zona Dorada de Mazatlán, uno de los principales centros turísticos del puerto:

“La procesión de los difuntos y sus dolientes son almas en pena que claman justicia, almas – huesos-ataúdes que andan en los pies de los vivos, hacen ruido y dejan ecos, almas en pena que porfían en este bregar político, y sus silencios son voces, argumentos. Silencios en alórbolas por la justicia. El gobierno con el desatino de la injusticia hizo hablar hasta los muertos y ahora están en la calle. Y la gente murmura sólo Dios sabe porqué los levantó. Tienen sus temores. Son cosas sagradas, es la cristiandad...”

La opinión pública veía así entremezclados lo profano y lo sagrado. Los bienes materiales y los intangibles, dando un matiz diferente a la manifestación de los desplazados, despertando simpatías entre la población, aunque con opiniones divididas, pues había quienes reprochaban el caos vial y los inconvenientes de las protestas masivas, pero también se levantaron voces de apoyo y empatía hacia los que se quedarían sin sus pueblos.

Aunque el movimiento no logró todos sus objetivos y los protestantes continúan enfrentando una difícil etapa de adaptación a los nuevos pueblos, los comuneros de la Picachos sentaron un precedente de resistencia en el sur de Sinaloa para futuros movimientos sociales y lograron sentar a negociar a los gobernantes que en un principio los habían ignorado casi de forma sistemática. Como resultado, logró los siguientes compromisos del Gobierno del Estado, si bien la mayoría de ellos se encuentran aún en espera de su cumplimiento: construir entre 50 y 60 viviendas más, destinar 25 millones de pesos para ampliación de casas, hacer la urbanización de los nuevos pueblos organizando un programa de empleo temporal para los comuneros, otorgar a los pobladores afectados la concesión para explotar la pesca deportiva en la presa, entrega de cinco lanchas equipadas con motor, restituir a la comunidad de San Marcos sus calles pavimentadas, la cancha, el quiosco el cobertizo, iniciar un programa de plantación de árboles frutales que serán plantados por los mismos beneficiarios, entre otros tendientes a restablecer el orden público y mejorar el nivel de vida de los habitantes con mejores servicios y oportunidades.

En resumen, las claves de la resistencia se pueden enumerar como sigue:

- a). El estandarte del apego socioterritorial.
- b). El involucramiento de la opinión pública y el manejo de medios.
- c). La participación de líderes carismáticos.
- d). El uso de símbolos para provocar un mensaje de impacto.
- e) La deslegitimación del gobierno.

4. Reflexiones finales

La experiencia del desplazamiento suele ser una experiencia traumática porque, como hemos visto en lo expuesto anteriormente, el territorio se vuelve parte importante de la propia conciencia humana. En el caso del Nuevo San Marcos, la población, de una conformación eminentemente heterogénea ya que está compuesta por diferentes niveles generacionales y de clases sociales, hombres, mujeres, niños, lo que hace el conflicto que lleva más de tres años por lo que llaman “justa indemnización”, repercute de forma distinta en cada uno de los miembros de la colectividad. Cada quien sintió de forma diferente la ofensa de ver “ahogado” su territorio.

Cuando se abandonan las actividades económicas habituales —la ganadería y la agricultura en los seis pueblos desplazados por la presa Picachos—, cuando se deja la tierra donde se nació y se vivió por varios años o décadas, cuando se deja de forma abrupta parte del referente cultural heredado por los ancestros y se abandona la forma particular de relacionarse con el otro y con lo otro, y, en fin, cuando cambian las condiciones geográficas unidas a su referente cultural, crece la posibilidad de pérdida de una identidad cultural anterior, pero en contraparte surge la posibilidad de reavivar la identidad territorial al verse obligados a defenderla. Vale apuntar que para que exista una identidad territorial es necesaria una voluntad colectiva, un sentimiento de cohesión a la comunidad y a una región específica, así como un reconocimiento de la historia común y, por tanto, la memoria, que suele ser la ideación activa del pasado, según definición de Durkheim.

El caso de la Picachos ilustra la importancia actual del territorio y sus implicaciones sociales para el desarrollo regional, pero sobre todo de considerar a los habitantes como actores

sociales y no como entes pasivos a quienes se les puede desplazar fácilmente. Otra enseñanza que nos deja este tema sobre la identidad es sobre su poder para incitar a la movilización ciudadana y la participación activa de los pobladores para incidir en las decisiones del gobierno. Esto se advierte a través de los elementos afectivos, como es la topofilia y la nostalgia que de alguna manera fortalecieron la legitimidad del movimiento al contar con el apoyo de gran parte de la población ajena al conflicto. La resistencia civil de los pueblos expulsados por la presa Picachos es un testimonio de que la política se puede mover a todos los niveles y no sólo en el campo de los grandes intereses o las instituciones políticas tradicionales, tales como los partidos políticos o las entidades gubernamentales.

Bibliografía y referencias:

Castells, Manuel (2009). La era de la información. Economía Sociedad y Cultura. El poder de la identidad, Vol. II. Siglo XXI Editores, México, pp. 28-34.

Giménez, Gilberto (2007). Estudios sobre la cultura y las identidades sociales, CONACULTA, México, pp. 25-50; 115-147; 149-172.

Reinhard, Bendix. 1979. Max Weber: el retrato de un intelectual. Argentina. Amorrortu.

Freund, Julien. 1966. Sociología de Max Weber. Argentina. Lotus Mare.

Ramírez, Jesús (2008). La construcción de la presa Picachos: una visión histórico-socioambiental, CONACYT, México, pp. 55-74.

“Tensión en el aeropuerto por protesta de comuneros”. **Periódico El Debate**. Mazatlán, Sinaloa. Agosto 06 de 2009. Año IX. No. 3157. Pág. 2A

“Desalojan la Picachos”. **Periódico Noroeste**. Mazatlán, Sinaloa. Julio 14 de 2009. Año XXIX. No. 11601. Portada.